

SE SUSCRIBE

En Madrid en el despacho de la IMPRENTA NACIONAL.

No se recibirá por el correo pliego alguno oficial ó particular que no venga franqueado.

PRECIOS DE SUSCRICION.

MADRID... Por un mes... 12 rs. Por tres meses... 36



SE SUSCRIBE

En provincias en todas las ADMINISTRACIONES DE CORREOS. En Paris, en casa de los Sres. SAUVEDRA Y DE RIBEAUDOUX, rue d'Hauteville, núm. 12. En LONDRES, MOORGATE STREET, núm. 35.

PRECIOS DE SUSCRICION.

Table with columns: PROVINCIAS, UTRAMAR, EXTRANJERO and rows for subscription durations (Por un mes, Por tres meses, Por seis meses).

GACETA DE MADRID.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La Reina (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

EXPOSICION A S. M.

SEÑORA: En la obra de reparacion y conciliacion de todos los intereses legítimos que el Gobierno de V. M. se ha propuesto realizar con perseverancia, el Clero puede prestar servicios inmensos si, comprendiendo su elevada mision, influye con su palabra y con su ejemplo en el mejoramiento de las costumbres.

Entre las medidas que el Gobierno medita con tan noble propósito, es una de ellas que la provision de las prebendas y dignidades de la Iglesia se verifique, á propuesta de la Cámara, en los eclesiásticos que acrediten ser los más dignos por su virtud y su talento, á la manera que se hacia por la antigua Cámara de Castilla y en la forma que se dispuso tambien en el Real decreto de 25 de Julio de 1851, que no ha dejado de regir en la provision de los deánatos de las iglesias catedrales y colegiales del reino.

La adopcion de esta medida, que á primera vista podrá parecer de escasa importancia, será, Señora, de inmensos resultados; porque aumentando las garantías de la eleccion para las gerarquías elevadas de la Iglesia, fortalecerá el ánimo de los eclesiásticos virtuosos en el cumplimiento de sus penosos deberes, y será un estímulo, una esperanza más para la juventud estudiosa que se dedique con santa vocacion á la carrera de la Iglesia.

Fundado en tan elevadas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobacion de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 26 de Setiembre de 1856.—SEÑORA.—A L. R. P. de V. M.—Cirilo Alvarez.

REAL DECRETO.

Tomando en consideracion las razones que me ha expuesto el Ministro de Gracia y Justicia, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La provision de las prebendas, dignidades, canongías y beneficios que me corresponden en las iglesias catedrales y colegiales con arreglo á las disposiciones vigentes, se verificará desde esta fecha á propuesta en terna de la Cámara del Real Patronato.

Art. 2.º Para formar la Cámara sus propuestas, se atenderá á las reglas prescritas en mi Real decreto de 25 de Julio de 1851, sin perjuicio de consultarme las alteraciones que convengan, y que la experiencia aconseje, respecto de la referida mi Real disposición.

Dado en Palacio á 26 de Setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Cirilo Alvarez.

REALES DECRETOS.

Accediendo á los deseos de D. Ramon Saavedra y Pando, Magistrado de la Audiencia de Valladolid, vengo en trasladarle á la de la Coruña en la plaza vacante por traslacion de D. Baltasar Alvarez Reyero, que lo es electo

Dado en Palacio á 26 de Setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Cirilo Alvarez.

Accediendo á los deseos de D. Baltasar Alvarez Reyero, Magistrado electo de la Audiencia de la Coruña, vengo en trasladarlo á igual plaza que resulta vacante en la de Valladolid por traslacion de D. Ramon Saavedra y Pando.

Dado en Palacio á 26 de Setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Cirilo Alvarez.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REALES DECRETOS.

Vengo en nombrar Superintendente de las minas de Almaden á D. Francisco Giner de la Fuente,

Administrador principal de Hacienda pública de la provincia de Granada.

Dado en Palacio á 26 de Setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria.

Vengo en nombrar en comision Administrador principal de Hacienda de la provincia de Granada á D. Eugenio Lopez, Superintendente de las minas de Almaden.

Dado en Palacio á 26 de Setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria.

Ilmo. Sr.: El Sr. Ministro de Fomento, con fecha 3 de Junio último, dijo á este Ministerio de mi cargo lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de la Gobernacion lo siguiente:

Excmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la Real orden de 13 de Abril último, expedida por ese Ministerio, y remitida al de mi cargo por el de Hacienda, consultando si pueden admitirse en los depósitos que hacen las empresas periodísticas las acciones del Canal de Isabel II, teniendo presente que el no hallarse declaradas admisibles las referidas acciones para esta clase de depósitos, es por la razon de haberse creado con posterioridad á la promulgacion de la ley de 22 de Marzo de 1837, y considerando que por Real decreto de 17 de Julio último se dispuso que estas acciones sean admitidas por todo su valor nominal en las fianzas ó depósitos de cualquiera clase que hayan de prestarse al Gobierno, S. M. se ha servido resolver que las mencionadas acciones del Canal de Isabel II se admitan por todo su valor nominal en las fianzas ó depósitos que presten las empresas periodísticas.

Lo que de Real orden traslado á V. E. en contestacion á la dirigida por el Ministerio de su digno cargo en 13 de Mayo último.»

De la propia Real orden lo trascribo á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Setiembre de 1856.—Cantero.—Sr. Director general del Tesoro.

Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la denuncia presentada por D. Pedro Antonio Redondo contra la Compañía de seguros mutuos de ganados de carga, labor y tiro, establecida en Valencia con el título de La Protectora, por no haber hecho uso del papel sellado en sus libros y pólizas de inscripcion.

Enterada S. M., y con presencia de los informes emitidos por las oficinas de Valencia, Asesoría general de este Ministerio, Tribunal Supremo Contencioso-administrativo y por la Direccion general del cargo de V. E., con cuyo dictamen se ha dignado conformarse, ha tenido á bien resolver:

1.º Que la Sociedad de seguros mutuos de ganados, titulada La Protectora, no ha incurrido en responsabilidad por haber omitido en sus libros el uso del papel sellado, mediante á no hallarse ostensiblemente comprendidas las Compañías de seguros en el art. 36 de la Real instruccion de 1.º de Octubre de 1851, ni en las disposiciones posteriores.

2.º Que ha cometido falta y debo exigirsele responsabilidad, al tenor de lo prescrito en el art. 74 del Real decreto de 8 de Agosto de 1851, por no haber empleado papel del sello en las pólizas de suscripcion, conforme á lo prevenido en el art. 7.º del mismo Real decreto y en el 23 de la instruccion mencionada.

3.º Que en consideracion al objeto beneficioso de esta Compañía, se limite la pena al reintegro del papel sellado que ha debido invertirse en las pólizas, y al importe de la tercera parte de la multa que corresponde al denunciador por las 20,007 que se habian expedido en papel sin sello á la fecha en que se giró la visita, perdonándose las otras dos terceras partes á que tiene derecho la Hacienda.

4.º Que conste para lo sucesivo la obligacion en que se hallan las Compañías de seguros, de cualquiera clase, de extender las pólizas en el papel sellado que corresponda, con arreglo al interes ó premio que se estipule; y en el caso de no apreciarse en ellas esta circunstancia por no devengarse interes fijo, sino el que resultare segun la importancia del siniestro, se extenderán en papel del sello 4.º, conforme á la práctica establecida.

Y 5.º Que atendida la conveniencia para los mismos asociados de que los libros de estas Compañías se hallen con todas las garantías que se exigen para las de comercio, se establezca en su fuerza y vigor el párrafo noveno, art. 18 del Real decreto de 8 de Agosto de 1851, que prescribe el uso del sello en los de las Sociedades de seguros, de cualquier clase, adicionándose en esta parte el art. 36 de la Real instruccion de 1.º de Octubre del mismo año, por el que implícitamente se excluyeron de aquel importante requisito.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Setiembre de 1856.—Cantero.—Sr. Director general de Rentas estancadas

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 2.º

Remitido al Tribunal Supremo Contencioso-administrativo el expediente sobre autorizacion para procesar á Baltasar Vazquez, distribuidor de la

correspondencia pública de Jerez de los Caballeros, ha consultado lo siguiente:

«Este Supremo Tribunal ha examinado el expediente remitido al Ministerio del digno cargo de V. E. por el Gobernador civil de la provincia de Badajoz á consecuencia de haber negado su autorizacion al Juez de primera instancia de Jerez de los Caballeros para procesar al cartero Baltasar Vazquez.

De dicho expediente resulta: Que en 17 de Diciembre de 1853, Julian Gamero, vecino de la villa de Valencia de Mombuey, dió parte al Teniente de Alcalde de la misma de que al regresar el día anterior de Jerez de los Caballeros, le manifestó, á su paso por la villa de la Oliva, Manuel Gañan, vecino de la misma, que su criada habia encontrado en el sitio llamado Pared de la Cumbre una cartera con varios papeles que parecia debian pertenecer á Baltasar Vazquez, conductor de la balija de Valencia de Mombuey; y que como entre los papeles que dicha cartera contenia se hallaba una carta con el sobre á José Gallego, cerrada con obla y sellada con el de la Administracion de Correos, fecha 17 de Noviembre anterior, la cual parecia habia sido retenida, hacia entrega formal de la referida cartera para que procediera á lo que hubiera lugar:

Que evacuadas las citas hechas por el Julian Gamero, depusieron los testigos examinados en conformidad á lo que queda relacionado; y en su vista, el Teniente Alcalde mandó arrestar á Baltasar Vazquez, el cual en su declaracion indagatoria manifestó que la cartera que se le presentaba era suya, y la habia perdido de la faltriquera ó bolsillo en Jerez, y que la carta que contenia, dirigida á Don José Gallego, la llevaba para ponerla en la caja por no hallarse este en la villa, ni haber mandado á recogerla á su casa despues de haberle avisado.

Que remitidas al Juzgado de primera instancia de Jerez de los Caballeros las diligencias practicadas, pidió el Promotor fiscal que se dictase auto de sobreseimiento, toda vez que del extraviado de la cartera no podia deducirse que habia habido violacion de secreto, por hallarse cerrada la carta, ni interceptacion de correspondencia, por lo que el hecho á que debia su formacion la causa no era justiciable, y que con tanto más motivo debia dictarse el auto propuesto, cuanto que la causa pudiera servir para dar pábulo á los encaños políticos que, segun era público y notorio, se hallaban exacerbados en Valencia de Mombuey con motivo de las elecciones municipales que se hallaban pendientes; añadia, por último, que en caso de no estimarse así, era necesario la autorizacion del Gobernador de la provincia para procesar al Baltasar, que dependia de su autoridad:

Finalmente, que no habiéndose conformado con la peticion fiscal el Juez de primera instancia de Jerez de los Caballeros, impetó el Gobernador de la provincia la autorizacion para procesar al Baltasar Vazquez; pero habiendo resuelto el Gobernador, de acuerdo con el Consejo provincial, oír al interesado, este manifestó que no habia entregado la carta dirigida á José Gallego, porque se hallaba ausente de la villa, y nadie se habia presentado á recogerla; que hizo muchas pesquisas en busca de la cartera que creia perdida, y que la formacion de la causa no habia tenido otro objeto que el de privarle de voto en las elecciones de concejales, como lo habian conseguido; en vista de lo cual, el Gobernador, conformándose con el parecer del Consejo provincial, que manifestó no resultaban méritos para calificar de exceso justiciable la retencion de la carta, denegó la autorizacion.

En virtud de tales antecedentes: Visto el Real decreto de 27 de Marzo de 1850, en que se establecen las disposiciones que han de observarse para procesar á los Gobernadores de las provincias y demas empleados y corporaciones dependientes de su autoridad:

Considerando que, segun resulta del expediente, la carta con sobre á D. José Gallego que se halló en la cartera del conductor de la correspondencia de Valencia de Mombuey, Baltasar Vazquez, estaba cerrada y no se le habia entregado por no hallarse en la poblacion, ni saber su paradero, y que por lo tanto no puede deducirse de ese hecho que en el medio culpabilidad por parte del Baltasar Vazquez,

El Tribunal es de parecer se consulte á S. M. que confirmando la resolucion del Gobernador de la provincia de Badajoz, se sirva negar la autorizacion solicitada por el Juez de primera instancia de Jerez de los Caballeros, para procesar al cartero de Valencia de Mombuey, Baltasar Vazquez.»

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por el expresado Tribunal Contencioso-administrativo, lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Setiembre de 1856.—Rios.—Sr. Gobernador de la provincia de Badajoz.

Remitido al Tribunal Supremo Contencioso-administrativo el expediente sobre autorizacion para procesar á D. Manuel Romero, Alcalde de Ontur, ha consultado lo siguiente:

«El Tribunal ha examinado el expediente original en que el Gobernador de la provincia de Albalace ha denegado al Juez de primera instancia de Hüllin la autorizacion solicitada para procesar á Don Manuel Romero, Alcalde de Ontur, por exaccion de multas en metálico.

Del testimonio con que acompañó su oficio el Juez de Hüllin al Gobernador, resulta que á excitacion del Fiscal de S. M. proveyó auto la Audiencia territorial de Albalace, á fin de que el referido Juez procediese con arreglo á derecho, por las multas que aparecia haber cobrado en metálico el Alcalde Romero.

La informacion sumaria acreditó que efectivamente en 2 de Mayo de 1852 exigió dicho Alcalde á D. Manuel Serrano, por contravencion de las ordenanzas rurales, 18 rs. 28 maravedís librándole un recibo en papel simple; y que por el mismo concepto cobró tambien en metálico algunas otras multas de á real vellon cada una al propio Serrano y á Leoncio Cantos y consortes, denunciados por los guardas del campo; Serrano añadió al rectificarse que habia satisfecho una tercera multa de 14 rs.

El Fiscal estimó acreditada la infraccion del artículo 3.º del Real decreto de 14 de Abril de 1848 y disposiciones posteriores, opinando que procedia solicitar la autorizacion correspondiente como el Juzgado lo decretó:

A propuesta del Consejo provincial concedió el Gobernador 10 días al Alcalde para que expusiese; y este lo verificó manifestando:

1.º Que en el pueblo no se hallaba papel de multas, y era preciso acudir á la cabeza del partido: 2.º Que por las insignificantes cantidades con que habia penado las infracciones de las ordenanzas rurales, no creyó prudente obligar á los multados á que fuesen por el papel, prefiriendo comprarlo el mismo Alcalde en las frecuentes ocasiones en que pasaba á la cabeza del partido:

3.º Que efectivamente así lo habia hecho segun resulta del papel que con sus respectivas certificaciones se acompañan; y por último, que no existia defraudacion de la Hacienda pública, ni otra culpa que la de omision de la entrega de la mitad de las hojas á las personas multadas:

El Consejo provincial, apreciando como ciertos los descargos del Alcalde, y en consideracion á que si bien no se hallaba rigurosamente cumplido el artículo 3.º de la ley de 14 de Abril de 1848 procedia circunstancias especiales, y léjos de haber malicia, resultaba lleno el objeto de dicha ley, fue de parecer que no debia someterse al expresado Alcalde á las vejaciones de un procedimiento criminal. Con cuyo dictamen se conformó el Gobernador denegando la autorizacion:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 14 de Abril de 1848:

Vistas las Reales ordenes de 8 de Agosto del mismo año y 4 de Febrero de 1851:

Visto el Real decreto de 27 de Marzo de 1850: Considerando que el Alcalde de Ontur, D. Manuel Romero, si bien cobró en metálico el importe de algunas multas de insignificante valor, empleó este en comprar papel correspondiente segun resulta de las hojas certificadas y selladas con diferencia de muy pocos días de la fecha en que las multas fueron exigidas:

Considerando que la falta del cumplimiento literal del art. 3.º del Real decreto de 14 de Abril de 1848 y demas disposiciones vigentes, se halla justificada por la carencia de papel de multas en el pueblo de Ontur, y consiguiente necesidad de proveerse de aquel en otro punto más ó menos lejano; por lo que hubiera sido agravar inmensamente la correccion, que en la mayor parte de los casos solo consistia en un real vellon, de haber obligado á las personas multadas á exhibir el papel correspondiente:

Considerando que, como de los precedentes se infiere, no aparece intencion criminal, ni ha resultado defraudacion de los actos del Alcalde D. Manuel Romero:

Considerando que el mismo reconoce, sin embargo, haber incurrido en la omision de la entrega de la mitad de las hojas á los multados, y que no importa menos á la justicia y conveniencia pública el proteger el puntual y cuanto posible cumplimiento de las leyes y decretos, que la seguridad de los agentes de la Administracion, cuando resultan inculpables en el desempeño de funciones, pura y exclusivamente administrativas, ó han incurrido solo en faltas que deben corregir sus superiores en uso de las atribuciones que las leyes les conceden.

El Tribunal entiende que puede servirse V. E. consultar á S. M. la confirmacion de la negativa resuelta por el Gobernador de Albalace.»

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por el expresado Tribunal Supremo Contencioso-administrativo, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Setiembre de 1856.—Rios.—Sr. Gobernador de la provincia de Albalace.

Remitido al Tribunal Contencioso-administrativo el expediente sobre autorizacion para procesar á D. Saturnino Rodriguez, Alcalde que fue de Paterna, ha consultado lo siguiente:

«Visto el expediente original instruido por el Gobernador de la provincia de Albalace, con el testimonio remitido por el Juez de primera instancia de Alcaraz, en solicitud de autorizacion para procesar á D. Saturnino Rodriguez, Alcalde de la villa de Paterna, por desobediencia á las ordenes del mismo Gobernador, de cuyo expediente resulta:

Que hallándose encausado el Alcalde Rodriguez por los delitos de estafa y falsedad, despues de haber concedido la correspondiente autorizacion dicho Gobernador, ordenó al Teniente Alcalde con fecha 7 de Noviembre de 1853, en atencion al procedimiento y haberse acordado la prision del Alcalde,

que hasta la resolucion de aquel se encargase de la jurisdiccion:

Que á solicitud del Promotor, por auto asesorado de 4 del mismo Noviembre, se dejó sin efecto el anterior de prision dictado contra el Alcalde; y cuando este recibió la comunicacion del Teniente, de fecha 10 inmediato, se resistió á entregar la jurisdiccion alegando dicho motivo:

Que el Teniente de Alcalde instruyó diligencias, y pasadas al Juzgado de Alcaraz, el Promotor calificó de desobediencia á las ordenes del Gobernador la conducta del Alcalde; y de conformidad con su dictamen, se solicitó autorizacion para procesar á este funcionario:

Que usando de la audiencia concedida, el mismo Alcalde hizo presente no existia tal desobediencia, porque en comunicaciones de 6 y 10 del mismo Noviembre habia consultado al Gobernador si debia retener ó entregar la jurisdiccion, una vez alzado el auto de prision; y tan luego como en 12 de Diciembre se le comunicó el orden del 7, declarando que la suspension era impuesta por consecuencia del procedimiento, la dió el debido y puntual cumplimiento:

Y que el Gobernador, de acuerdo con el parecer del suprimido Consejo provincial, denegó la autorizacion solicitada:

Visto el capítulo 5.º del Código penal, y especialmente el art. 287:

Visto el art. 76 de la ley de Ayuntamientos de 8 de Enero de 1845:

Vistos el art. 4.º, números 4.º y 8.º, y los artículos 7.º y 8.º de la ley de 2 de Abril de 1845 para el gobierno de las provincias:

Visto el Real decreto de 27 de Marzo de 1850: Considerando que el Alcalde de la villa de Paterna, D. Saturnino Rodriguez, suspendió la ejecucion de la orden del Gobernador del 7 de Noviembre de 1853 con motivo del alzamiento de su prision y de la consulta elevada el día anterior, reproducida el 10 inmediato al mismo superior, cuya resolucion del 7 de Noviembre obedeció y cumplió tan luego como le fue comunicada:

Considerando que por lo mismo no hubo desobediencia de parte del Alcalde de la villa de Paterna conforme á la legislacion administrativa, ni á la penal vigentes,

El Tribunal entiende que procede la confirmacion de la negativa resuelta por el Gobernador de Albalace.»

MINISTERIO DE FOMENTO.

Obras públicas.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo propuesto por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, se ha servido conceder á D. Diego Rodriguez Miyeres, vecino de Arlos, concejo de Llanera, en la provincia de Oviedo, la Real autorizacion que tenia solicitada para concluir la construccion de un molino harinero en el sitio llamado la Raposera, aprovechando para su movimiento las aguas del río Pontico, con la condicion de que no ha de elevarse la presa más que lo suficiente para que la rebalsa producida por ella quede uno y medio pies (0m, 418) más baja que la parte de la orilla del prado del Pontico, y sujetándose la obra á la inspeccion del Ingeniero de la provincia; advirtiéndose que esta concesion, como todas las de su clase, debe entenderse sin perjuicio de los derechos de cualquier otro interesado.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Setiembre de 1856.—Collado.—Sr. Director general de Obras públicas.

Ilmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de las dudas que han ocurrido á los Ingenieros Jefes de varios distritos sobre la aplicacion de las franquicias recientemente declaradas á favor del transporte de cereales, se ha servido S. M. resolver que, al darse por esa Direccion general las instrucciones convenientes á dichos Jefes, se les haga entender que el Real decreto de 20 de Agosto próximo pasado no produce en los portagos más novedad que la de hacer extensiva á la cebada y á las harinas, hasta 4.º de Junio de 1857, la exencion de pago ya establecida y en observancia en virtud del Real decreto de 17 de Enero de 1854, y en los términos prevenidos por la Real orden de 1.º de Abril del propio año respecto del maíz y del trigo de todas clases, en que se comprende el centeno y el mezcladizo, cualesquiera que sean la procedencia y el destino de estos artículos, y con exclusion de toda otra semilla, conforme á las expresadas disposiciones y á lo prevenido por Real orden de 12 del actual, relativamente á la exencion de los demas derechos.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Setiembre de 1856.—Collado.—Sr. Director general de Obras públicas.





